

## Reseñas

CHARLES C. RAGIN, *Fuzzy-Set Social Science*, Chicago, University of Chicago Press, 2000, 352 pp.

LEÓN DARÍO PARRA BERNAL\*

El estudio de las estructuras sociales es tan complejo que no basta con ajustarlo a esquemas lineales. La dinámica social parte de un contexto no uniforme en el que la asociación entre elementos de un mismo conjunto de factores debe entenderse en términos de espacios multivectoriales y causalidades múltiples. No obstante, la mayoría de los métodos utilizados por los investigadores sociales hasta la fecha se encuentran sometidos a restricciones de tipo metodológico que los atan a la linealidad y a supuestos que pueden interferir en los resultados que se encuentran. Antes de que se introdujera el método de “Fuzzy Sets” o, literalmente, “conjuntos borrosos”, el investigador que quería combinar lo cuantitativo con lo cualitativo debía sacrificar representatividad o validez externa en su estudio.

El método que describe Ragin, en su libro *Fuzzy-Set Social Science*, ofrece una alternativa para resolver dicho problema, al permitir la combinación del análisis de lo general, que busca patrones comunes a toda la población, con el análisis particular, que estudia la heterogeneidad y la riqueza cualitativa de cada caso observado. Al trabajar mediante una lógica de conjuntos utilizando el álgebra booleana, “Fuzzy Sets” permite combinar lo conceptual y lo teórico con lo matemático y analítico, y expandir la posibilidad de establecer un diálogo entre las ideas del investigador y la evidencia empírica encontrada.

“Fuzzy Sets” es un método de medición que permite conocer el grado o nivel de pertinencia de determinado caso a un conjunto de atributos. Así, los valores cero y uno se dan como los puntos extremos de inclusión y exclusión, a partir de los cuales el investigador puede construir múltiples categorías de acuerdo con la cercanía de cada elemento a uno u otro punto. Los pasos a seguir en un análisis de este tipo se podrían resumir en: 1) identificar la evidencia conceptual y teórica para asignar los *scores* de pertenencia o vinculación; 2) especificar el ancho de cada categoría construida y encontrar los puntos de quiebre en los que se notan cambios de tendencia; y 3) clarificar los conceptos a utilizar para definir cada categoría.

\* FLACSO, Sede México.

Ragin resalta que en “Fuzzy Sets” la información se analiza a partir de un espacio multivectorial que depende del conjunto de variables escogidas por el investigador, y que hace posible asignar a cada categoría construida un vector específico con infinitas localizaciones en un espacio determinado. Por ejemplo, si se desea analizar el nivel de pobreza de un grupo de naciones respecto a su nivel de democratización, se tendría que clarificar primero qué se entiende por cada concepto, luego definir *scores* de pertenencia de cada nación a los conjuntos pobre/autoritario y rico/democrático, estableciendo el ancho de las posibles categorías intermedias a generar en cada atributo (nación pobre moderada 0.25, ni pobre ni rica 0.5, rica moderada 0.7 etc., nación en transición democrática 0.75, post autoritaria 0.25 etc.), y clarificando el significado conceptual de cada categoría y subcategoría. Finalmente se esquematiza lo observado en un plano cartesiano.

La lógica de vinculación de sistemas con que operan los conjuntos borrosos permite analizar cada caso por separado, sus atributos particulares y la forma en que se identifica dentro de un conjunto de elementos con características similares. Al construir conjuntos y subconjuntos de poblaciones específicas, el método descrito por Ragin ayuda a comprender las diferencias existentes entre los casos analizados, a entenderlos ya no de manera individual sino en relación con los demás, a ver la causalidad como algo heterogéneo y coyuntural, y finalmente, a analizar los cambios cualitativos sobre determinado aspecto en todos los elementos de estudio.

El uso de “Fuzzy Sets” permite conocer el grado de concentración de cada elemento estudiado con respecto a cierto atributo o combinación de atributos. Para ello se calcula el cuadrado de los *scores* asignados a todos los casos, y se ve qué tan agrupados se encuentran en torno a una característica particular. De manera inversa, se puede obtener el grado de dispersión de las observaciones calculando la raíz cuadrada de los *scores* para todos los casos, con el fin de esquematizarlo en el plano cartesiano. Ello le facilita al investigador efectuar análisis complejos de causalidad entre variables de acuerdo con las bases conceptuales que posea del tema.

Cabe anotar que los “Fuzzy Sets” no deben considerarse variables continuas para medir los fenómenos sociales, y el método tampoco pretende explicar la variabilidad entre los datos. Por el contrario, sirve para indicar conjuntos de elementos con atributos diferentes de acuerdo con niveles de pertenencia preestablecidos por el investigador.

Ragin observa que para utilizar el método de los “Fuzzy Sets” es importante evaluar la plausibilidad de las relaciones causales que se quiere encontrar, tratando de no incurrir en errores de tipo conceptual-metodológico, además de analizar si las condicionales que se asocian a cada atributo arrojan los efectos esperados sobre los resultados obtenidos—principio de suficiencia—. Por último, a pesar de que el autor resalta los innumerables beneficios de utilizar una técnica como ésta en las ciencias sociales, advierte sobre la necesidad de que el investigador cuente con una sólida formación teórica respecto al tema que está investigando, y que conozca detalladamente las características de cada caso estudiado antes de adoptarla.

Lo anterior implicaría, además de un amplio conocimiento de los casos incluidos, una exhaustiva investigación teórica y conceptual de los temas a estudiar antes

de asignar *scores* y categorías a los elementos de estudio. Quizá ésta sería la única limitante para el uso de la técnica de “Fuzzy Sets”, dado que la manera en que se esquematicen los conjuntos de elementos, las categorías a crear y los *scores* a asignar podría estar influida por la subjetividad con la que el investigador juzga el objeto de estudio. No obstante, la posibilidad que ofrece de ajustar los supuestos teóricos a la evidencia empírica y encontrar relaciones teóricas multicausales hace de “Fuzzy Sets” un instrumento de gran capacidad analítica para el campo de la investigación social.

En conclusión, el método expuesto por Ragin resulta de gran utilidad para las ciencias sociales dado que permite combinar el análisis cuantitativo con el cualitativo, trascendiendo las restricciones metodológicas que existen en la mayoría de las técnicas de medición convencionales, que suelen limitar la imaginación del investigador y lo alejan de la realidad que estudia.

FERNANDO CASTAÑEDA SABIDO, *La crisis de la sociología académica en México*, México, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2004, 311 pp.

RAMÓN RESÉNDIZ GARCÍA \*

El libro de Fernando Castañeda, *La crisis de la sociología académica en México*, constituye un diagnóstico penetrante, complejo y crítico de la sociología en tanto saber académico. Su identidad y sus transformaciones son el primer eje reflexivo; su profesionalización o infraestructura para generar conocimientos es el segundo. Ambos conforman los hilos conductores que nos guían a un tercero, enfatizado en el título del libro: la singularidad identitaria de la sociología académica en México, la crisis que experimenta, los desafíos y oportunidades que encara ante las transformaciones de la sociología en general.

Se trata de un texto riguroso que utiliza con profundidad y precisión sus fuentes bibliográficas; complejo en virtud de que se interna en discusiones sustantivas de la sociología y de las ciencias sociales en general, como los problemas de la demarcación científica y disciplinaria, la validez del saber sociológico y su contingencia social; bien armado sobre la base de reconstrucción y reflexión crítica sobre la identidad y transformaciones de la sociología como tradición y programa de conocimiento, horizonte dentro del cual se examina críticamente la sociología académica en México. Esa estrategia comparativa le permite a Castañeda desplegar al menos una doble argumentación: la que se refiere a la sociología, su identidad, transformaciones y desplazamientos, y la que alude a la manera en que esos elementos tomaron forma y expresión en México.

La reflexión crítica acerca de la sociología mexicana responde a la exigencia de caracterizar a la sociología como cuerpo de conocimiento articulado y con una iden-

\* Facultad de Estudios Superiores Acatlán/Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

tividad definida, tanto en un nivel sustantivo como en el plano metateórico. Para Castañeda la sociología es un discurso entre pares que trasciende los contextos e intereses particulares en virtud del compromiso que surge de la forma de comunicación: el sujeto enuncia su discurso fundamentándolo de tal manera que el destinatario puede reconstruir las condiciones de validez como si fueran condiciones de enunciación y evaluarlo como si lo hubiera producido él, independientemente de los intereses y deseos del enunciante.

Ésa es la ruta que permite crear condiciones de transubjetividad que dotan de potencial heurístico y densidad al conocimiento, es la lógica que favorece la construcción de tradiciones de conocimiento, es decir, formas de construcción del discurso en cuyo marco se procesan la continuidad y la ruptura. Es el derrotero que permite generar programas de conocimiento, cuyas formas de producción y reproducción están diseñadas de modo tal que su función primordial consiste en producir nuevo conocimiento fundado.

La sociología, dice Castañeda, es un discurso que produce conocimientos al tiempo que produce a sus enunciantes. Su virtud es la forma colectiva social en que produce-conocimiento; su exigencia es que productores y receptores conozcan los procedimientos mediante los cuales se generan tales conocimientos en el marco de la tradición y sus programas.

Integrada por ocho capítulos, agrupados en cuatro partes, la obra en cuestión se propone una defensa crítica de la sociología académica, entendida como discurso que demarca y delimita su identidad al transformarse en un discurso de pares, especializado y profesionalizado, producido en un marco institucional complejo. En esa transformación se configura la identidad sociológica y se consolida una compleja infraestructura institucional para la producción del saber sociológico dentro de un espacio cultural determinado.

Castañeda muestra la manera en que históricamente se consolidó la sociología fortaleciendo la relación entre pares, y cómo, demarcándose de otros discursos y de otras esferas sociales, logró autonomía, proceso cuya realización cubrió de fines del siglo XIX a principios del siglo XX.

Cuatro desplazamientos fueron constitutivos de la tradición sociológica y marcaron su diferencia e identidad frente a otros discursos previos o contemporáneos: 1) el que va del Estado a la sociedad o de lo político a lo social, y mediante el cual lo social deja de ser concebido como un elemento constituido por lo político —por ejemplo la idea de que el orden social se constituye mediante un pacto o contrato—, para entenderse como un elemento constituyente de la política, el gobierno o el Estado; 2) del sujeto a la estructura, desplazamiento que permite concebir al sujeto como productor y producto de la sociedad; 3) de lo consciente a lo inconsciente, en virtud de lo cual las formas de pensamiento son entendidas como productos sociales, al igual que las formas de racionalidad y la misma sociología; 4) la redefinición de la relación teoría praxis y con ello el tema de la fundamentación de un orden público. Éste será el núcleo fuerte del programa de la sociología.

Los dos capítulos que integran la primera parte —“La identidad ambivalente de la sociología académica” — proporcionan las claves para entender cómo la sociolo-

gía se demarcó de los saberes sociales que la antecedieron, y también de sus contemporáneos. La constitución de ese núcleo duro implicó la crítica de las funciones sociales de los discursos que la sociología confrontó, así como la crítica de sus concepciones de sociedad. Por esa vía la sociología redefinió el objeto de estudio, la forma de explicarlo y la manera de intervenir en él.

En México, el contexto no permitía el proceso de demarcación del discurso sociológico ni proveía la infraestructura necesaria, de ahí su identidad débil y su ambivalencia. El discurso sociológico en México ha vivido ligado a modas externas a la vez que afirma el carácter histórico, singular de la realidad mexicana; no acumula mucho conocimiento: se pretende académico y científico a la vez que se muestra ideológico y político.

En la segunda parte del libro —“La infraestructura del discurso sociológico”—, Castañeda analiza la infraestructura de los discursos de la sociología mexicana en dos niveles, a saber: 1) el de las relaciones entre los intelectuales y la política y; 2) los nexos entre la universidad y la política en México. Es decir, el espacio cultural y la infraestructura institucional para entender la relación entre la producción de la cultura y el poder público. El análisis muestra que en México la cultura y la política se enlazaron para generar a la nación como protagonista. En ese marco los intelectuales hablan no desde la sociedad sino desde la nación; son y han sido conciencia nacional, intérpretes del tiempo.

La contraparte sería una universidad que no se demarcó del Estado ni de la sociedad, que se asumió como conciencia crítica del país y que funge a la vez como aparato de gobierno y como eje de la opinión pública nacional. En ese contexto se procesó la débil identidad académica de la sociología en México, una identidad ambigua que oscila entre lo científico y lo ideológico, en la aspiración de ser conciencia nacional cultivada en un marco institucional que fue garante de la libertad de pensamiento en México durante la mayor parte del siglo xx: la Universidad Nacional Autónoma de México. El precio de esa aspiración y garantía será la debilidad y escasa autonomía de su saber, en particular de las ciencias sociales.

Con tales antecedentes se perfila la tercera parte del libro —“El discurso sociológico mexicano”—, provocadora y libre de concesiones. En ella, Castañeda analiza la sociología mexicana como tradición de conocimiento; lo hace dando cuenta de la forma en que trasciende un texto que se considera clásico, sustantivo o fundacional de acuerdo con esa tradición.

En efecto, concentrándose en las formas de justificación y validación que hacen trascender un texto —en este caso *La democracia en México* de Pablo González Casanova—, el autor analiza la tradición de conocimiento de la sociología mexicana, conformada por la impronta de la política y el proyecto nacional propio de la cultura mexicana. El análisis muestra que, en la sociología académica mexicana, los textos trascienden por sus virtudes políticas y no por las académicas, por la importancia de quien los escribe y no por el texto mismo, porque en su momento contribuyeron a la discusión del proyecto de nación y no a la demarcación de un saber entre pares. Castañeda destaca que los textos de José Iturriaga, *La estructura social y cultural de México*, publicado en 1951, y *La industrialización de México*, de Manuel Germán Parra, de

1954,<sup>1</sup> tenían elementos para convertirse en referentes fundamentales del discurso sociológico actual. Ninguno de ellos inauguró una tradición de sociología en México.

Ampliando la perspectiva analítica, el autor refiere que la sociología en México ha ocupado diferentes espacios y desempeñado diversas funciones asociadas e insertas en la esfera y las políticas públicas, lo cual ha contribuido a su identidad ambivalente, a su fragilidad y dependencia ante las transformaciones de esa esfera y sus políticas. Ese nexo con lo público da cuenta en buena medida de la débil identidad sociológica y de las crisis que afrontan ciertas tradiciones, como las sociales en México, que siguen modas y se reinventan en cada generación; donde florece una mezcla confusa entre la persona, su relevancia pública y política, y la importancia de su obra.

Una tradición sociológica como la generada en México con una débil identidad, poco demarcada, donde la crítica se entiende como criterio de adhesión o demarcación política, plegada a una esfera y a un poder público que ahora prescinde de sus servicios ideológicos, enfrenta un problema mayor: una crisis de identidad. El progreso, la salvación o el desarrollo nacional ya no son los ejes de las políticas y de la esfera pública mexicana; esa esfera cambió también sus prioridades. La sociología en México, cuya identidad se constituyó en el marco de esas tareas y de su aportación práctica e ideológica, entró en crisis, al igual que la esfera y la política pública con las cuales se correspondieron.

Como lo muestra la cuarta parte del libro —“La desestructuración de la sociología”—, la tradición sociológica está en medio de un intenso proceso de transformación: el retorno del sujeto en los ochenta, como rasgo característico de las nuevas tendencias de la sociología, representará un punto de quiebre.

La reestructuración del programa sociológico y ese retorno al sujeto se expresan, al menos, en cuatro planos: en primer lugar, la importancia que adquiere el problema de la reproducción y transformación de las estructuras simbólicas como producto de la dimensión reflexiva de la acción y por tanto una transformación adicional que alude a la dialéctica entre estructura y sujeto; en segundo término, el tema de las identidades y las transformaciones de lo público que se manifiestan en la emergencia de los llamados nuevos movimientos sociales que ya no requieren de la infraestructura discursiva de las clases y plantean el tema de la libertad en las opciones de vida en lugar de los grandes proyectos emancipadores; en tercer lugar, la crisis del naturalismo expresado en el rompimiento del consenso en torno al modelo de racionalidad científica; finalmente, el del nexo problemático entre teoría y práctica, es decir, el problema que representa para la sociología entender la determinación social del conocimiento y hacerse cargo a la vez de la voluntad y de la decisión, o bien la tensión entre la fundamentación epistémica del discurso y la justificación moral.

En medio de esa reestructuración y de los desplazamientos de su núcleo fuerte, la sociología tiene que hacer frente a un conjunto de discursos que la desafían, que impugnan su identidad y la descalifican: la nueva macroeconomía, el neocontractualismo o la nueva filosofía política y las teorías posmodernas.

<sup>1</sup> José Iturriaga, *La estructura social y cultural de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1951; y Manuel Germán Parra, *La industrialización de México*, México, UNAM, 1954.

El programa sociológico debatió y rebatió versiones anteriores de algunos de esos discursos. Las concepciones de la sociología frente a los problemas y las elaboraciones que ellas plantean son mucho más profundas y complejas. La razón, el individuo, los símbolos y el lenguaje, por ejemplo, no son supuestos o peticiones de principio, sino cuestiones problemáticas a desentrañar, cuya comprensión ha encarado compleja, profunda y críticamente la sociología. Tampoco se ha reducido a ser discurso normativo ni metafísica; siendo saber fáctico no puede evadir el enfrentamiento de problemas normativos; si ha de tomar en cuenta seriamente el plano reflexivo de actor, ese dilema aparece como constitutivo de la identidad sociológica.

Frente a las transformaciones contemporáneas de la sociología y ante el asedio de otros discursos sociales, la sociología académica en México se encuentra muy poco equipada para hacerles frente. Sin embargo, su crisis actual es al mismo tiempo una oportunidad para consolidarse; el éxito de esa empresa depende, en parte, de que conozca las tradiciones de la teoría sociológica pues, como apunta el texto de Castañeda, la crisis de la sociología mexicana es también un problema de ignorancia; se desconocen las tradiciones y a menudo se toman como sociología discursos sociales que no lo son, cuya profundidad y núcleos duros han sido rebatidos por el discurso sociológico.

La crisis y débil identidad de la sociología académica en México deriva de que sus funciones ideológicas la comprometieron con nociones y discursos que han desbordado su función analítica y obstaculizado su consolidación en tanto saber profesional. Asumir la oportunidad que implica la crisis para consolidar la identidad de la sociología significa evitar la búsqueda de un nuevo sujeto trascendente que sustituya a la nación, eludir las formas caudillistas, construir una identidad con independencia de la sociedad y del Estado, construir de manera distinta el dilema normativo que ha sido propio de la sociología y que en México asumió la expresión del intelectual como conciencia nacional.

La obra de Castañeda es un análisis profundo, detalladamente informado que lo mismo va de la teoría sociológica clásica a la contemporánea, de la teoría sociológica a los discursos sociales que la impugnan, de la sociología en general a la sociología en México. Se trata de una pieza de sociología crítica necesaria frente a la urgente tarea de reestructurar y consolidar la identidad de la sociología en México.

SERGIO AGUAYO QUEZADA, 1968. *Los archivos de la violencia*, México, Grijalbo/Reforma, 1998, 331 pp.

ALBERTO DEL CASTILLO TRONCOSO\*

La historiografía del movimiento estudiantil del 68 es amplia y crece día con día. A casi cuatro décadas contamos con la visión de los estudiantes, narrada en distintos

\* Instituto de Investigaciones José María Luis Mora.

momentos por algunos líderes y protagonistas del movimiento, entre los que destaca el texto ya clásico de Luis González de Alba. También pueden citarse los trabajos de investigación de algunos académicos que han puesto el énfasis en los aspectos políticos y sociales, como en el caso de Sergio Zermelo, o incluso de cuestiones culturales y la producción de imaginarios, como en el caso de César Gilabert. Todo esto, entre muchos otros ejemplos. Lo que no teníamos era una investigación que recuperara el punto de vista de los distintos aparatos policíacos y lo pusiera en perspectiva, en función de una investigación de archivo más amplia que cotejara este tipo de información con otros acervos.

Algunos de los archivos más importantes no habían sido consultados y la información documental no había sido cotejada con las declaraciones y testimonios de los protagonistas de aquellos años. La presente investigación de Sergio Aguayo, publicada en el año de 1998, contribuye en su medida a ir enderezando este camino. El autor realiza una aproximación crítica al 68 con una cierta distancia que le permite valorar la amplia documentación oral y escrita consultada de una manera mesurada y objetiva. El resultado es una narración histórica ágil y documentada, construida desde las cloacas del sistema político, en un flujo permanente que va desde los informes de agentes anónimos de Gobernación y Presidencia, hasta la dócil consulta al poder de académicos y diplomáticos mexicanos radicados en el extranjero para el hostigamiento de plumas críticas y disidentes.

Las pregunta clave de la investigación se enfoca en intentar describir y explicar de qué manera ocurrieron los sucesos del 2 de octubre y en señalar la participación de los distintos sectores del gobierno, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la prensa nacional y extranjera, y la propia comunidad estudiantil. El resultado es un estudio serio y bien documentado que va mostrando al lector los hilos de la violencia gubernamental durante los meses previos a la tragedia, la puesta en escena correspondiente a la masacre del 2 de octubre y los intentos fallidos de control que hiciera el Estado mexicano para tratar de instrumentar una historia oficial sobre los acontecimientos. Entre los fondos documentales destaca la información proveniente del Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en menor medida, del Departamento del Distrito Federal, cuyos documentos no han sido clasificados en su totalidad y fueron depurados con mayor celo por las autoridades, a lo que hay que agregar los efectos destructivos del terremoto de 1985.

En contraste, conviene señalar las ausencias importantes, entre ellas la de la Secretaría de la Defensa, que no permitió que el autor consultara su acervo; la de la Dirección Federal de Seguridad y la de la Presidencia de la República, las cuales, todavía en 1998, no eran accesibles a los investigadores y la ciudadanía en general. En este sentido, la presente investigación también representa un termómetro adecuado para ubicar el grado de apertura del Estado mexicano a 30 años de los sucesos y los límites de consulta para la investigación académica. Como sabemos, la derrota del partido oficial ocurrida dos años después permitió un paso más en la consulta, con la apertura de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en el AGN.

El primer capítulo se titula "El estilo mexicano de reprimir y resistir" y proporciona el encuadre general en el que operaba la violencia como parte de la cultura

política del Estado mexicano durante la década de los sesenta. Un acercamiento al estilo con que la clase política solía usar la violencia entre 1958 y 1970 favorece una comprensión mucho más profunda del comportamiento de los distintos actores políticos. Resulta interesante verificar que en ese lapso se mantuvieron tres piezas clave en lo que el autor denomina “la cabina de mando de la máquina de coerción”: Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y luego presidente; Luis Echeverría, que saltó de subsecretario a titular de la Secretaría de Gobernación y Fernando Gutiérrez Barrios, que pasó de subdirector a director de la Dirección Federal de Seguridad. El Estado dispuso en ese periodo de una maquinaria poderosa y eficaz. La Secretaría de Gobernación contaba con la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. La primera tenía como función “vigilar e informar sobre los hechos relacionados con la seguridad de la nación” e informaba directamente al presidente, mientras que la segunda realizaba “investigaciones y análisis de los problemas de índole política y social” y sólo informaba al secretario de Gobernación. Ambos servicios de inteligencia captaban una gran cantidad de información, pero adolecían de una grave deficiencia: la baja preparación de sus agentes se reflejaba en un hecho clave, esto es, que no elaboraban ni interpretaban la información e incluían en el mismo rango chismes, notas exageradas y hechos relevantes. Esta deficiencia reforzó las tendencias paranoicas del Estado mexicano durante este periodo y contribuyó a sobredimensionar los peligros que representaba el movimiento estudiantil para la seguridad nacional.

La dimensión internacional resulta muy importante para completar este cuadro. En este periodo la cultura política estaba permeada por un nacionalismo conservador y excluyente que reforzaba el autoritarismo. El gobierno mexicano tenía una relación estrecha con Washington, lo que no le impedía gozar del apoyo de Moscú y La Habana. La vinculación estratégica con los servicios de inteligencia estadounidenses incluía un informe diario de la CIA a la Presidencia de la República. Los agentes de la CIA espían a los disidentes mexicanos e incluso los perseguían dentro del territorio nacional. El gobierno de Estados Unidos estuvo muy bien informado a lo largo del conflicto del 68 y aprobó todas las medidas de coerción y represión, incluyendo, por supuesto, la del 2 de octubre. Los gobiernos de la URSS y Cuba privilegiaron sus intereses de estado y apoyaron con diversas medidas las decisiones del Estado mexicano. A pesar de ello, siguieron contando con el apoyo y el beneplácito de buena parte de la izquierda mexicana.

El segundo capítulo se titula: “Las violencias de 1968” y muestra de qué manera tanto el gobierno como los estudiantes actuaron de acuerdo con esquemas culturales previos en los que cada uno había construido una imagen del enemigo. Resulta paradójico que, aunque el Estado mexicano atravesaba por uno de sus momentos de mayor poderío, justamente en esa coyuntura el gobierno se sentía inseguro y denostaba y descalificaba a sus críticos y disidentes a la menor provocación. El ejercicio de la violencia gubernamental contra los estudiantes permite diferenciar varias etapas del movimiento. La primera comprende del 22 al 30 de julio y va de la represión de los cuerpos policíacos a estudiantes y maestros de la Vocacional 5 al tristemente célebre “bazucazo” de San Ildefonso. El gobierno recurre a policías y granaderos y la

defensa de los estudiantes es muy combativa. En los enfrentamientos callejeros intervienen los porros, curtidos en ese tipo de peleas. Esta información ha sido verificada por parte tanto del lado policiaco, como del bando estudiantil. Echeverría y Corona del Rosal se reúnen la noche del día 29 y deciden la intervención del ejército a las 0:30 hrs del día 30. La Defensa Nacional envía a un contingente de 2 000 efectivos que terminan imponiéndose a una resistencia generalizada.

Una segunda etapa corresponde al mes de agosto y va de la intervención del rector Barrios Sierra en defensa de la autonomía —lo cual legitima al movimiento y lo convierte en una organización de masas— a la celebración de las marchas más numerosas de la década de los sesenta, los días 13 y 28. Los estudiantes se organizan en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) y toman la iniciativa, con el apoyo de diversos grupos de académicos y estudiantes de diversas instituciones, lo mismo que de algunos grupos de escritores e intelectuales.

El gobierno, por su parte, apela a sus esquemas conocidos de corrupción y negociación política y reacciona con ambivalencia, llamando al diálogo y descalificando a los estudiantes. Una de las figuras más representativas de esta estrategia es Luis Echeverría, el secretario de Gobernación, el cual llama públicamente a los estudiantes a celebrar un diálogo “franco y sereno” y al mismo tiempo denuncia, en las columnas periodísticas semanales publicadas en *La Prensa* durante el mes de agosto, que el movimiento era “extranjero y antimexicano” y que estaba controlado por el Partido Comunista con la colaboración de Cuba y China. En el mismo periodo, los servicios de inteligencia estadounidenses criticaban la estrategia del gobierno mexicano y señalaban que había sobreestimado el papel de los supuestos agitadores comunistas, fallado en dar seguimiento a las opciones para solucionar el problema y subestimado la hostilidad estudiantil contra las autoridades.

La tercera etapa es el resultado de la movilización gigantesca de la marcha del 27 de agosto, que hizo pensar al gobierno que las estrategias de represión debían ser más severas e incluir la acción represiva no sólo del ejército sino de diversos grupos paramilitares. El inicio del nuevo estado de cosas tiene lugar con la acción de un grupo de *halcones* del Departamento del Distrito Federal, que baja la bandera nacional y levanta en su lugar una bandera rojinegra entre las 22 horas del día 27 y la 1:35 del día 28. Tanto la prensa internacional como los servicios policiacos locales dieron cuenta de la agresividad de los estudiantes contra el gobierno y de su alto nivel de organización.

En el extranjero se empieza a poner en duda la viabilidad de la celebración de los juegos olímpicos. El informe de gobierno del presidente da cuenta de la nueva postura gubernamental al descalificar por completo a los estudiantes y anunciar la eventual utilización de la represión. La columna periodística de Gobernación hace la apología de Díaz Ordaz y condena sin tapujos a los estudiantes. Los servicios de inteligencia no toman nota del carácter mesurado de la última gran marcha silenciosa realizada por los estudiantes el 13 de septiembre. La paranoia gubernamental está desatada.

Entre el 21 y el 25 de septiembre tuvieron lugar los enfrentamientos más violentos entre las fuerzas armadas y los estudiantes. Los escenarios fueron Zacatenco y Tlatelolco. Los jóvenes del Politécnico y los vecinos de la zona mantuvieron a raya a

soldados y granaderos. Estas batallas campales ocuparon lugares privilegiados en la prensa extranjera. El gobierno toma la decisión de aplastar al movimiento. Los propios estudiantes deciden la fecha al proponer, el 27 de septiembre, la realización de un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre.

El tercer capítulo lleva por título: “Intriga y caos en Tlatelolco”, y se enfoca en descifrar la lógica y el perfil utilizados por el gobierno en el operativo político militar del 2 de octubre. En la tercera semana de septiembre campeaban en el ambiente la duda y la incertidumbre sobre la posible celebración de las olimpiadas. A partir de una lectura extensa de diversos archivos, el autor muestra, sin embargo, la manera en que el gobierno controlaba los hilos del tablero internacional, con la colaboración estrecha de la central de inteligencia estadounidense, que tenía contactos claves con los consulados y las comandancias militares; la buena disposición de los gobiernos cubano y soviético, que controlaron y acotaron el apoyo de los grupos de izquierda de sus países dentro de la línea oficial que convenía al gobierno de Díaz Ordaz; y, sobre todo, el apoyo incondicional del Comité Olímpico Internacional a los lineamientos del Estado mexicano. Esta última organización era presidida por Avery Brundage y Aguayo pudo consultar los entretelones de la intriga preolímpica gracias a la decisión de Brundage de donar los archivos del coi a una universidad estadounidense. En particular, el autor destaca la participación de dos militares mexicanos en este complejo rompecabezas: los generales Marte R. Gómez y José de Jesús Clark Flores, este último nada menos que vicepresidente del propio coi.

Una de las aportaciones más importantes del libro consiste en que presenta una detallada exposición del plan gubernamental para aplastar al movimiento en una decisión tomada por la Presidencia y Gobernación en la última semana de septiembre. Para ello, el autor recurre al análisis de antecedentes importantes de la utilización de la violencia por parte del Estado y las fuerzas militares, entre los que destaca lo que el autor denomina “El Tlatelolco potosino”, esto es, la represión gubernamental contra el movimiento cívico encabezado por el doctor Salvador Nava en el estado de San Luis Potosí, que incluyó la utilización del ejército y de francotiradores y paramilitares la noche del 15 de septiembre en la Plaza de Armas de aquel estado, en lo que constituye una operación muy similar a la aplicada siete años después en Tlatelolco, la cual involucra entre sus operadores a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y Fernando Gutiérrez Barrios.

El autor reconstruye la operación militar de Tlatelolco mediante un seguimiento crítico de los archivos. Como el mismo Aguayo señala, no ha encontrado en los documentos ningún “plan maestro” que instruya a los distintos sectores. Sin embargo, resulta posible comprender las líneas y parámetros generales que guiaron el operativo. Entre las huellas del archivo destaca la tarjeta del secretario de Gobernación correspondiente al 2 de octubre, que servía como recordatorio al funcionario de los puntos importantes a realizar en aquella histórica jornada. Entre los datos registrados por el propio Echeverría Álvarez destaca la realización del mitin estudiantil y la mención puntual del nombre de Sócrates Campos Lemus con una cifra misteriosa: 19 000 pesos. Otros documentos de Gobernación certifican la participación de Áyax Segura, otro de los líderes del CNH como miembro activo de la Dirección Federal de Seguridad.

Apoyado en la propia documentación oficial, Aguayo va ubicando el papel protagonista de cada uno de los actores de las instancias federales, desde Gobernación hasta la Dirección Federal de Seguridad, pasando por el Departamento del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República, y las significativas discrepancias entre el ejército mexicano y el Estado Mayor Presidencial. El análisis de esta documentación va trazando las líneas generales de un operativo militar con fallas importantes en la coordinación de sus líneas y en el que la violencia acotada se salió del carril, dejando al descubierto el ángulo más autoritario del gobierno, el mismo que fue utilizado contra ferrocarrileros y maestros en el 58 y contra los médicos a principios de los sesenta.

Mención especial merece el seguimiento del teniente coronel de Artillería Manuel Díaz Escobar, pieza clave al servicio del general Corona del Rosal, que entrenó bajo su mando a 300 paramilitares que desempeñaron un papel central en la represión ejercida contra los estudiantes: las balaceras contra la Vocacional 7 y El Colegio de México, la subida de la bandera rojinegra en el asta bandera del zócalo la madrugada del 28 de agosto y, finalmente, el inicio de la violencia aquella tarde del 2 de octubre en Tlatelolco.

El cuarto capítulo se titula: "Sinfonía autoritaria y democratización" y muestra la manera en que el gobierno trató de imponer la versión oficial sobre los acontecimientos del 68, un operativo que cerró la pinza de la represión policiaca y militar, que el autor denomina "la ceremonia del olvido" y que Sir Peter Hope, el embajador británico en aquel entonces, caracterizó en su momento como "la conspiración del silencio".

De nueva cuenta, la envergadura del operativo se muestra a plenitud gracias a la revisión puntual de archivos tan significativos como el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En estas páginas nos enteramos del comportamiento "políticamente correcto" de los gobiernos cubano y soviético, que silenciaron adecuadamente todo tipo de protestas en sus países y se encargaron de hacer llegar de manera explícita todo su apoyo al gobierno de Díaz Ordaz. También resulta relevante asomarse a la nómina de los escritores privilegiados por el gobierno, como Luis Spota, Roberto Blanco Moheno y Martín Luis Guzmán, entre muchos otros, que supieron corresponder a los favores gubernamentales con numerosos artículos y crónicas que estigmatizaron al enemigo estudiantil. Otro de los protagonistas más destacados del operativo gubernamental fue Antonio Carrillo Flores, el fiel secretario de Relaciones Exteriores, que elaboró "listas negras" de empleados públicos; despidió de manera fulminante a personajes como Alfonso Corona Rentería, consejero económico de la embajada de México en Francia, y a Leopoldo Zea, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por haber manifestado en privado o en público sus discrepancias con las maniobras represivas del gobierno; y, sobre todo, encabezó una campaña de corte macartista contra el poeta Octavio Paz, quien había renunciado a la embajada mexicana en la India por los acontecimientos de Tlatelolco. En dicha campaña, Flores contó con la colaboración del historiador Silvio Zavala, a la sazón embajador mexicano en Francia, el cual siguió los pasos de Paz en París y llegó a sugerir el silenciamiento del poeta con argumentos pseudolegales para obligarlo a salir de aquel país.

En todos estos casos, la lupa de Aguayo permite distinguir las piezas de un complejo rompecabezas con las que un régimen de carácter autoritario intentó de manera infructuosa esculpir un relato único de los hechos. El intento culminó en el fracaso por diversas razones. La primera de ellas estriba en la pobreza del discurso oficial, que a pesar de contar con plumas tan prestigiadas como las de Jorge Castañeda, Hugo B. Margáin y Jesús Reyes Heróles, sólo apeló una y otra vez al mismo estribillo de la conjura comunista. Otra razón de peso apunta al destacado papel de la prensa internacional. Aguayo relata que el 2 de octubre fue observado por 14 agencias noticiosas internacionales, 20 corresponsales y 62 enviados especiales, sin contar los equipos de radio y televisión que ya operaban en la capital debido a la inminente inauguración de las olimpiadas. La pésima reacción del gobierno mexicano, que trató de minimizar los hechos y de corromper a los reporteros y establecer una relación de complicidad con ellos mediante la intermediación de Fernando M. Garza, el director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia, sólo contribuyó a empeorar la situación. En resumen, apunta el autor:

El silencio fue imposible porque hubo víctimas que no procesaron su duelo, porque se contó con información, porque el hecho fue registrado por los sectores más educados de México y porque el evento se enganchó con el exterior en un momento en el que el mundo observaba a México. Tlatelolco se convirtió en un símbolo de todo lo negativo del sistema político que tenía que esclarecerse como condición previa para dar el brinco a una sociedad más justa (p. 292).

Con toda la documentación revisada, Aguayo llega a la conclusión de que Gustavo Díaz Ordaz giró órdenes distintas al “Batallón Olimpia”, al ejército, a la Judicial Federal y a la Dirección Federal de Seguridad. Aunque su objetivo no fue preparar una masacre, sí tenía la conciencia clara de que en el ejercicio de la represión se sacrificarían vidas de uniformados y civiles para aplastar de una vez por todas al movimiento. La lógica de la violencia del régimen autoritario en las décadas anteriores sustenta esta aseveración, la más importante de toda la investigación.

El trabajo se complementa con algunas imágenes provenientes de fondos gráficos. A diferencia del resto de la investigación, los documentos fotográficos aparecen con breves descripciones que ilustran al lector respecto de su contenido, pero no lo contextualizan, ni cotejan la información con algunos otros fondos o imágenes publicadas por la prensa, ni proporcionan claves de interpretación. Parece como si la imagen simplemente ilustrara los hechos de una manera neutral u objetiva. Se comprende que la lectura e interpretación gráficas no constituyen los objetivos centrales de esta investigación, pero consideramos que en posteriores ediciones el investigador podría compartir con el lector algunas reflexiones que ponderen la enorme importancia de este tipo de documentos y marquen la pauta para nuevas lecturas e interpretaciones. Con ello se enriquecería el contenido del trabajo y se dejarían abiertos una serie de puentes y vasos comunicantes con otras formas de hacer historia.

MANUEL ÁNGEL RÍO RUIZ, *Violencia étnica y destierro. Dinámica de cuatro disturbios antigitanos en Andalucía*, Granada, Fundación Secretariado General Gitano/Editorial Maristán, 2003, 231 pp.

RAQUEL GUZMÁN ORDAZ\*

Andalucía, comunidad autónoma del sur de España que cuenta con ocho provincias y la presencia gitana más numerosa y heterogénea del país, porta una larga historia de mestizaje y convivencia interétnica, no falta de conflictos con los gitanos, como los cuatro acaecidos en la provincia de Jaén que analiza el sociólogo Río Ruiz.

Los gitanos de España, a pesar de poseer en términos formales un estatus de ciudadanía desde hace siglos, arrastran aún el pesado tatuaje de marcas étnicas, convertidas en diferencias inquietantes y en fuentes de estigmatización etnicista de cuyo protagonismo y repercusiones, con frecuencia violentas, da cuenta el libro que nos ocupa.

La obra despliega una serie de estrategias y herramientas metodológicas cualitativas que, entre otras aportaciones, consigue develar la heterogeneidad, aun dentro de una misma provincia, de un colectivo históricamente receptor de acciones violentas, muchas veces justificadas por los mitos sociales vinculados a esta etnia.

Una de las paradojas más significativas de las atribuciones mantenidas sobre la etnia gitana es que la exaltación de algunos rasgos y valores de este pueblo, a veces tomados como emblemas idiosincráticos extensibles a una provincia o región, coexiste con amplios y arraigados prejuicios sobre el mismo. No obstante, aunque las actitudes que notamos hacia los gitanos sean contradictorias, los eventos delictivos y la amplia gama de conductas desviadas con las que frecuentemente se les asocia han tenido una primacía a la hora de “archivar” la imagen de los gitanos. De esa imagen, por ser quienes son, la memoria colectiva no los redime con facilidad.

Así, la etnia, la violencia y el desenlace de ésta, son materia de estudio de gran importancia, porque no hay que olvidar que desde el panorama global se nos recuerda continuamente que los conflictos de mayor envergadura sucedidos a últimas fechas están impregnados del cariz “étnico”. Así, se puede apuntar que nos encontramos ante una obra apasionante, escrupulosa y con un manejo teórico-metodológico agradecidamente original.

A partir de estos presupuestos, Río Ruiz construye un itinerario analítico que le permite estudiar exhaustivamente la problematización de divisiones étnicas y su influencia en los saldos violentos de los conflictos en los cuatro territorios jiennenses. Es de destacar, también, que la construcción de este itinerario analítico ofrece una sugerente gama de recursos explotados en otros estudios revelando con ello las potencialidades de las metodologías cualitativas para estudiar conflictos sociales.

Así, los cinco capítulos que conforman este libro adquieren coherencia analítica —entre otras cosas— por el atinado recurso explicativo que el autor elabora desde el

\* Doctoranda de Sociología. Universidad de Sevilla.

principio, al exponer tanto la metodología como las fuentes utilizadas a lo largo de la investigación. Ello proporciona una suerte de “mapa”, en el que se puede comprender la apuesta de análisis del investigador.

La investigación encuadra, apuntábamos, cuatro acciones colectivas violentas sucedidas de 1971 a 1991, en cuatro comunidades de la provincia de Jaén: Mancha Real, Martos, Torredonjimeno y Torredelcampo, donde la población paya atacó y, en tres de los casos, forzó el destierro de las minorías gitanas asentadas. Este “escenario escueto” podría hacernos caer en la tentación de definir automáticamente el trabajo como “estudio de caso”. Sin embargo, Río Ruiz siguiendo a Tilly, define su trabajo como “análisis clínico de la acción colectiva”, aclarando que no se trata de un cambio nominal ni mucho menos, pues lo que pretende—frente a los estudios de casos al uso—es “determinar los vínculos comunes o influencias históricas que puedan subsistir entre los casos analizados” (Tilly, citado en p. 26).

Desde esta fisonomía investigadora, Río Ruiz contextualiza los escenarios empíricos, procediendo a una reconstrucción monográfica muy particular, la cual supera las recetas descriptivas tan utilizadas a la hora de dar cuenta de los contextos. Así, el autor imprime a su primer capítulo un aspecto de vivacidad, familiarizando al lector tanto con los pormenores geográficos, demográficos y socioeconómicos, como—sobre todo— con los significados de las relaciones intra e interétnicas que se habían venido dando en los diversos escenarios de su análisis clínico, los cuales comparten una cercanía territorial, e incluso protocolos de acción en lo referente a la violencia colectiva que se vivió, pero en los que las condiciones previas no necesariamente se manifestaban de manera homóloga.

La distancia cronológica entre las acciones violentas es más compleja que extensa, debido sobre todo a la distribución temporal de los cuatro conflictos en veinte años de intensos cambios sociales y políticos en España. Éstos, a su vez, afectan a las relaciones y ejercicios de ciudadanía de los gitanos. De ello da cuenta el autor, haciendo una lectura intertextual de la información recopilada, elaborando una fecunda base de triangulación informativa.

El “laboratorio sociológico” que Río Ruiz acota en Jaén considera, en principio de cuentas, los sucesos en la localidad de Torredelcampo en 1971, los cuales, como el autor muestra, “destrozaron el sistema local de relaciones étnicas” (p. 42) que existía antes de que dos vecinos gitanos asesinaran a un vecino payo, evento que desencadenaría el destierro de los gitanos torrecampeños considerados como “portadores de una amenaza permanente para la integridad física, dada la imagen de los gitanos como patentadores de una violencia que ejercerían, además, bajo pautas familistas” (p. 41). Este destierro resurgirá como referencia a secundar en las posteriores acciones violentas, en las que vuelven a estar involucradas las incordias entre payos y gitanos.

Años después, el poblado vecino de Torredonjimeno presencia la grave agresión a un anciano payo por parte de un gitano miembro de un grupo heterogéneo, pero con una identidad deteriorada. Río Ruiz explica que en este lugar “se daban formas de vecindad interétnica(s) fluidas” (p. 48) pero que las relaciones con las familias gitanas locales “también mostraban algunas sombras localizadas entre algu-

nos miembros de la minoría” (*idem.*). La represalia colectiva se ensañó en esta ocasión con la familia del agresor, cuya vivienda fue incendiada en el curso de una manifestación. El autor sitúa este caso como “el primer linchamiento étnico documentado en la España posfranquista” (p. 50). Y tan sólo dos años después, en 1986, el también vecino poblado de Martos se adhiere a la escalofriante serie de disturbios antigitanos, pretextados en esta ocasión por una reyerta callejera en la que el gitano implicado —al parecer ebrio— arremetió contra un “castellano”, y le infligió heridas menores.

Río Ruiz explica que Martos era una población con marcada división residencial entre payos y gitanos. En la reconstrucción de los hechos que el autor hace basándose en diversas fuentes, el peso de la segmentación residencial fungirá como un factor para visualizar la división étnica que exacerba el estigma que se atribuye a los gitanos, “cuyo comportamiento global se juzga a partir de los actos de las ‘fracciones más desviadas’ del grupo estigmatizado” (p. 58). Esta vez el saldo del destierro alcanza a más de 75 por ciento.

La sombra de Martos llega en 1991 a Mancha Real, uno de los pueblos andaluces más ricos, que se había nutrido del retorno de sus emigrantes, entre ellos algunos gitanos que vivían “entreverados con los payos”, a diferencia de lo que sucedía en el vecino Martos. Se trataba de una comunidad gitana que había construido redes sociales sólidas por generaciones, mismas que desaparecen a raíz del asesinato de un payo a manos de un vecino gitano, recién llegado a la población. Al evaluar el saldo conjunto de estos conflictos, Río Ruiz advierte

sobre el inmenso poder del conflicto étnico, [que] muchas veces [está] cimentado sobre el recuerdo y la recreación en términos raciales de sucesos dramáticos e impactantes, para desatar antagonismos que, con anterioridad a esos sucesos críticos, podían jugar un papel mucho más secundario como factores limitativos de las relaciones intergrupales (p. 67).

La construcción contextual que hace el autor adquiere continuidad analítica en su segundo capítulo. Ahí, Río Ruiz disecciona meticulosamente las prenociones que alimentan algunas construcciones teóricas sobre la violencia civil, contrastándolas con los eventos violentos recogidos en su trabajo empírico. Frente a los habituales enfoques irracionalistas de la acción de masas, el autor apoya su disertación en una perspectiva sociológica sobre la acción colectiva.

En el tercer capítulo evalúa lo que denomina el “finiquito de la convivencia”. Esta parte del estudio permite vislumbrar las hendiduras de la violencia étnica sobre las relaciones interétnicas. El autor estima que, en los casos que conforman su estudio, también se puede sopesar la magnitud que los enfrentamientos étnicos tienen, puesto que, además de expresar antagonismos que deterioran vidas, patrimonios y relaciones, en ocasiones sembrados desde generaciones, los conflictos también concentran una inmensa capacidad para tensar aún más las divisiones étnicas, abriendo brechas infranqueables, como bien muestra la consolidación del destierro de los gitanos de estos pueblos andaluces donde, con anterioridad a los conflictos, existían múltiples puentes de convivencia entre vecinos payos y gitanos.

A lo largo de los dos últimos capítulos, Río Ruiz continúa con su saber sociológico, exponiendo los caminos teóricos que se han utilizado desde esta ciencia para explicar las causas de la violencia civil, y en particular la violencia étnica. Así, en su cuarto capítulo explora, a manera de ensayo, cuáles serían las incongruencias que se originarían al interpelar los casos objeto de su análisis clínico con dos teorías de inspiración funcionalista: la del desanclaje anómico o “desarraigo social” y la de las privaciones relativas.

Precisamente, el ejercicio analítico que realiza Río Ruiz tiene la misión de ilustrar las deficiencias que ambos modelos presentan, al menos cuando se plantean en estudios sobre la violencia étnica. El autor alimenta el análisis de sus casos en particular con un trabajo ilustrativo a partir de las explicaciones ofrecidas sobre los acontecimientos de índole similar que se han venido dando en diversas latitudes. Atiende a un análisis local, sin obviar lo global.

Río Ruiz abre y cierra su investigación planteando que, si bien existe un importante déficit de análisis sobre la violencia civil y étnica en particular, su trabajo no pretende inaugurar una nueva teoría social al respecto. No obstante, al final propugna por una explicación teórica sobre los hechos violentos sufridos por los gitanos jiennenses a partir de la teoría de los “ciclos de acción colectiva”. Así, da cuenta de lo que significan los ciclos y, en particular, de cómo se dan muchas características de esos fenómenos en la sucesión encadenada de violencia étnica que nos ocupa.

Con este trabajo Río Ruiz incita a múltiples reflexiones, pero en particular cabe destacar su latente preocupación sobre la violencia que tiene como telón de fondo a la etnicidad. La experiencia de los gitanos jiennenses es sólo una fracción minúscula de la violencia étnica que se vive a diario y en diversos sitios. Por eso, Río Ruiz con este trabajo alienta a analizar desde la distancia histórica errores y olvidos que deberían dejar de producirse.

Amén de su meticulosidad, estamos también ante una labor comprometida con las posibilidades existentes para repensar las actuaciones ante el antagonismo étnico desde diversas escalas. En suma, estamos ante un texto necesario y de muy recomendable lectura.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Este libro ha sido reseñado en España por el profesor Diego Palacios Cerezales, en la revista *Política y Sociedad*, vol. 42, núm. 2.